

18 de diciembre de 2005 – Número 107

## EN LUGAR DE PAGAR AL FMI SE PODRÍAN BLANQUEAR UN MILLÓN DE EMPLEOS

La cancelación anticipada de la deuda con el FMI tiene varios impactos negativos. Uno de los menos mencionados es que se siguen canalizando energías políticas y fondos públicos hacia temas no estratégicos. Si se optara por cancelar la deuda más cara (y no la más barata, como propone el Gobierno) se dispondrían de fondos suficientes como para iniciar una solución genuina a los más de un millón de trabajadores que trabajan “en negro” en las pequeñas empresas.

Usar reservas para cancelar deuda es un movimiento financiero patrimonialmente neutral. Es decir, se disminuye el activo y el pasivo de manera simultánea y por igual monto. Sin embargo, la decisión no deja de tener costos sociales importantes. Por un lado, porque el contexto de mayor vulnerabilidad y discrecionalidad que genera la medida obligará a profundizar el ajuste regresivo para generar mayores superávits fiscales. Por otro, porque usar fondos públicos para cancelar la porción de deuda que devenga la menor tasa de interés –en lugar comenzar por la deuda más costosa– es un derroche de recursos.

Las últimas colocaciones de títulos públicos que hizo el Estado nacional tuvieron un costo financiero de más de 4 puntos porcentuales por encima del costo de la deuda con el FMI. Esto significa que **si se evitara tomar nueva deuda (más cara) en lugar de cancelar la más barata, el Estado se ahorraría aproximadamente 400 millones de dólares por año.** Una mirada rápida sobre el mercado de trabajo alcanza para encontrar usos socialmente muy rentables para esos recursos.

El INDEC informó que en el tercer trimestre del 2005 el **empleo no registrado** afecta al **46%** de los asalariados. Con datos del primer semestre, se puede desagregar mejor esta información para identificar áreas críticas donde el flagelo del empleo “en negro” está más arraigado:

- En **empresas con menos de 5 trabajadores**, la incidencia del empleo no registrado es del **73%**. Es decir, que apenas **3 de cada 10 empleos son “en blanco”**.
- Del **total de empleo no registrado**, el **55%** lo generan estas pequeñas empresas.
- El **salario promedio** que pagan estas pequeñas empresas a sus trabajadores “en negro” es de **\$420**, es decir, apenas un **30% del salario promedio formal**.

Los 400 millones de dólares por año de ahorro fiscal que implicaría evitar generar deuda cara en lugar de cancelar deuda barata podrían ser utilizados para instrumentar una agresiva estrategia de “blanqueo” de estos trabajadores de pequeñas empresas. Para ello es imprescindible establecer **un mínimo no imponible para el cálculo de las cargas**

**sociales. Si por ejemplo, se fijara en un valor equivalente al 65% del monto del salario mínimo legal se produciría una reducción significativa de la presión impositiva sobre los pequeños emprendimientos. El costo para el Estado serían unos 400 millones de dólares anuales, es decir, lo que podría ahorrarse gracias a un uso racional de las reservas.**

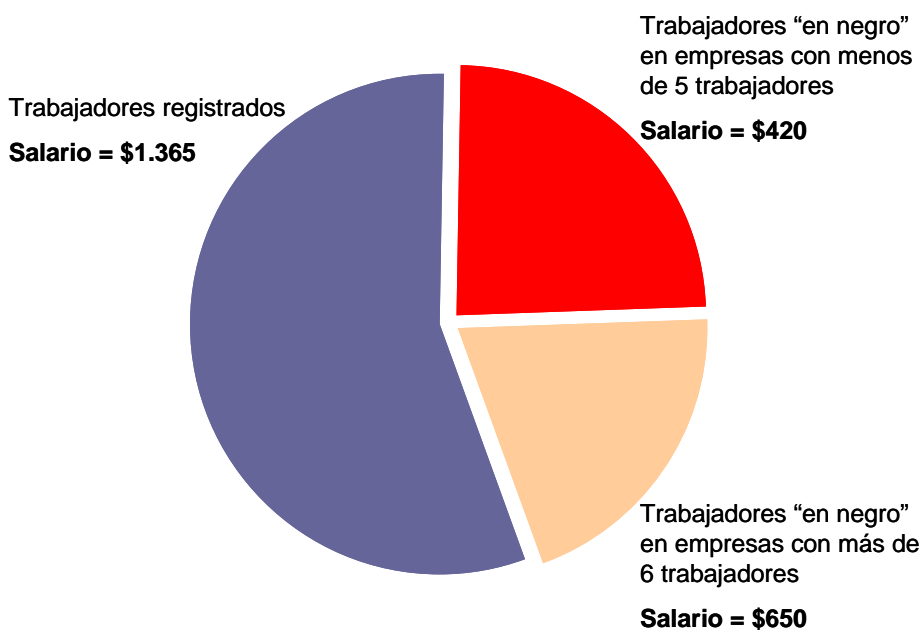
Si esto además va acompañado con otras medidas, como la simplificación de la registración laboral y la eliminación de los nichos de litigiosidad laboral, se promovería muy activamente el **“blanqueo” de más de 1 millón de puestos de trabajo “en negro” que generan las pequeñas empresas.**

El impacto social de un “blanqueo” de estas magnitudes entre los trabajadores de pequeñas empresas es muy trascendental porque la gran mayoría son miembros de hogares pobres. Planteado en otros términos, **la vía mas directa para romper con la lentitud que muestra la recuperación de los indicadores sociales es con una estrategia audaz de inclusión de las pequeñas empresas a la formalidad.** El tema también tiene implicancias económicas ya que, agotada la recuperación post-crisis, el crecimiento demanda aumento en las inversiones en todos los sectores y no sólo entre las empresas más grandes.

En este contexto, resulta paradójico que el Congreso se apreste a sancionar un conjunto de medidas fiscales que ignoran las realidades de las pequeñas empresas y las graves consecuencias sociales que se derivan del hecho de que casi la mitad de la economía opera en la informalidad. Se trata de una distorsión institucional grave que legisladores que llegaron a sus cargos pregonando la racionalización del sistema tributario olviden rápidamente sus propuestas (demostrando que la “borocotización” de la política es más que un hecho puntual). En términos más mediatos implica que el 2006 será un año con menos crecimiento, más inflación y sin solución para el problema del empleo no registrado. Esto implica que **antes de comenzar el 2006 ya se acepta que no menos de un tercio de la población seguirá viviendo en la pobreza**

### **El empleo “en negro” está concentrado en las pequeñas empresas**

Trabajadores asalariados del sector privado – Excluido servicio doméstico



Fuente: IDESA en base a INDEC